



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula el Registro Nacional de infracciones y sanciones graves en materia de pesca marítima y se actualizan los importes de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo 102 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmplame informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto, en lo que a las competencias de esta Agencia se refiere, la regulación del Registro Nacional de infracciones y sanciones graves en materia de pesca marítima, creado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento (CE) 1224/2009, de 20 de noviembre, del Consejo, que establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, modifica diversos Reglamentos de regulación y deroga Reglamentos (CEE) núms. 2847/93, de 12-10-1003, 1627/94, de 27-6-1994 y 1966/2006, de 21-12-2006. Según establece dicho precepto:

*“1. Los Estados miembros anotarán en un registro nacional todas las infracciones de las normas de la política pesquera común cometidas por buques que enarboles su pabellón o por sus nacionales, indicando las sanciones impuestas y el número de puntos asignados. Los Estados miembros también anotarán en su registro nacional de infracciones las cometidas por buques pesqueros que enarboles su pabellón o por sus nacionales que sean objeto de diligencias en otros Estados miembros, previa notificación de la resolución definitiva adoptada por el Estado miembro competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.*

*2. El Estado miembro que esté investigando una infracción de las normas de la política pesquera común podrá solicitar a los demás Estados miembros que faciliten la información anotada en su registro nacional sobre los buques pesqueros y las personas sospechosas de haber cometido la infracción en cuestión o sorprendidas mientras la cometían.*

*3. Cuando un Estado miembro solicite a otro Estado miembro información sobre las medidas adoptadas a raíz de una infracción, este último podrá facilitar la información pertinente sobre los buques pesqueros y las personas en cuestión.*



*4. Los datos contenidos en los registros nacionales de infracciones se conservarán sólo tanto cuanto sea necesario a efectos del presente Reglamento, pero siempre durante un mínimo de tres años naturales, a partir del inicio del año siguiente al año en que se tomara nota de la infracción.”*

El artículo 2 del Proyecto procede a la creación del mencionado Registro, adscrito según el artículo 1.2 a la Secretaría General del Mar, que queda designada como autoridad nacional competente a los efectos de realizar las funciones de establecimiento y funcionamiento del sistema de puntos para infracciones graves, conforme al artículo 125 del Reglamento 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011.

El propio artículo 2 especifica en su apartado 2 los supuestos que darán lugar a la inscripción, reiterando lo dispuesto en el artículo 93.1 del Reglamento 1224/2009. A su vez, el artículo 3 establece el plazo de conservación de los datos registrales, coincidiendo con lo establecido en el artículo 93.4 del citado Reglamento.

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. A su vez, el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, referido a la legitimación para el tratamiento sin consentimiento de datos en caso de existencia de una habilitación legal, se refiere expresamente a la posibilidad de que tal legitimación se derive de lo establecido en una norma del derecho de la Unión.

De este modo, la existencia del Registro y el tratamiento de datos que el mismo conlleva se encontraría amparado por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 93 del Reglamento 1244/2009.

En cuanto a la forma de inscripción de los datos en el Registro, el artículo 4.1 prevé la inscripción previa comunicación del órgano competente para la imposición de la sanción en el plazo de diez días hábiles desde que se resolvió el procedimiento sancionador, imponiéndose expresamente en el apartado 4.3 el deber de comunicación de esta información por parte de las Comunidades Autónomas, para lo que se implantarán los medios técnicos necesarios para permitir la interconexión entre las distintas autoridades competentes.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en su redacción actual, dispone que “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el



tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”. Al propio tiempo, el artículo 10.4 c) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 legitima la cesión de datos entre Administraciones Públicas cuando “la comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen sobre las mismas materias”.

En este sentido, debe recordarse que junto con las competencias sancionadoras atribuidas a las Comunidades Autónomas por el artículo 108 de la Ley 3/2001, conforme al cual “corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo, la tramitación y resolución de los expedientes correspondientes a las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización de productos pesqueros tipificadas en esta Ley”, el Proyecto sometido a informe atribuye a la Secretaría General del Mar la condición de autoridad nacional en esta materia, siendo una de sus competencias, conforme al artículo 125 d) del Reglamento 414/2011 “conservar los registros pertinentes de los puntos atribuidos o transferidos al titular de cada licencia de pesca”.

Por tanto, las cesiones previstas en el artículo 4 del Proyecto resultan igualmente conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación con otros Estados Miembros, se refiere a la misma el artículo 8 del Proyecto, viniendo a referirse a los supuestos contemplados en la Sección tercera del Capítulo I del Título X del Reglamento 414/2011, cuyo artículo 155 establece que “a los efectos de la presente sección, se entenderá por «solicitud de asistencia» toda solicitud de un Estado miembro a otro, o de la Comisión o el organismo designado por esta a un Estado miembro, de: a) información, incluida la contemplada en el artículo 93, apartados 2 y 3, del Reglamento de control; b) medidas coercitivas, o c) notificación administrativa”.

De este modo, las cesiones previstas en el citado artículo 8 deben igualmente considerarse amparadas por los artículos 93.2 y 3 del Reglamento 1244/2009, ya citado al comienzo de este informe, y 155 y siguientes del Reglamento 414/2011, en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, que legitima la cesión de los datos sin contar con el consentimiento del interesado cuando la misma se encuentre amparada por una norma con rango de Ley.

Por último, en cuanto al contenido del Registro aparece recogido en el Anexo del Proyecto, pudiendo considerarse que el mismo resulta ajustado al principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan



obtenido”, teniendo en cuenta lo establecido en las normas del derecho de la Unión que otorgan cobertura a este Registro.

Como única cuestión a tener en cuenta, debe señalarse que la creación del Registro implicará, lógicamente la creación de un fichero de titularidad pública por parte de la Secretaría General del Mar, debiendo en ese caso darse cumplimiento a lo establecido por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente”, siendo preciso a su vez que la norma de creación incorpore los extremos establecidos en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica.

En este sentido es preciso recordar que, conforme al artículo 53.1 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, “Cuando la disposición se refiera a los Órganos de la Administración General del Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, deberá revestir la forma de Orden Ministerial o Resolución del titular de la Entidad u Organismo correspondiente”.

A la vista de lo señalado hasta el presente lugar, esta Agencia informa favorablemente el Proyecto sometido a informe, si bien será necesaria la adopción de la correspondiente norma de creación del fichero a los efectos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999.